

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DIRECTA
EXPEDIENTE:	76111-33-33-001-2019-00174-01
DEMANDANTE:	OSCAR EVELIO SOTO GARCÉS Y OTROS Correo: alkebulan@hotmail.com
DEMANDADO:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO RECHAZA DEMANDA POR CADUCIDAD – REVOCA

OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso de apelación propuesto por la parte demandante contra el auto nro. 984 del 3 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Guadalajara de Buga, que rechazó la demanda por caducidad de la acción.

I. ANTECEDENTES

El señor Oscar Evelio Soto Garcés y otros solicitaron se declare la responsabilidad del estado por el daño antijurídico que padeció el señor Oscar Evelio cuando, mientras realizaba un curso de altura, sin contar con las garantías de seguridad exigidas por la ley, cayó de espaldas de una altura de dos metros, causando lesiones progresivas que solo se concretaron el 30 de junio de 2017, cuando la Junta Regional de Calificación de Invalidez le notificó la pérdida de capacidad laboral del 60.46%.

El juzgado rechazó la demanda al considerar que operó la caducidad del medio de control. Dijo que la fecha de partida del cómputo es el día siguiente al siniestro, es decir, el 8 de noviembre de 2013, pues fue tal suceso el que originó los padecimientos que hoy pretende sean reparados, no la notificación del dictamen de pérdida de capacidad laboral que lo único que hizo fue establecer la magnitud de la lesión mas no la fecha de configuración del daño.

La parte demandante apeló la decisión. Alegó que desconoce la garantía de acceso a la administración de justicia pues el daño es progresivo y sólo se concreta el 30 de junio de 2017 pues antes no se tenía pleno conocimiento del mismo.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. COMPETENCIA

De conformidad con los artículos 243¹ y 125² de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se rechaza la demanda es pasible del recurso de apelación, siendo competente para resolverlo el superior, en este caso, el Tribunal.

¹ “Artículo 243.- **Apelación.** Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
1. El que rechace la demanda.
(...)”
² “Artículo 125.- **De La Expedición De Providencias.** Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del “artículo 243 de este Código serán de la sala, (...)”

2.2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

¿La caducidad debe contabilizarse a partir de la fecha en que ocurrió el accidente cuyos efectos se atribuyen a la responsabilidad estatal o desde la fecha en que se notificó al lesionado su pérdida de capacidad laboral?

Para resolver es preciso tener en cuenta las siguientes premisas:

El artículo 164 numeral 2 literal d) del CPACA, en relación con la oportunidad para presentar la demanda del medio de reparación directa, prevé que esta deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, **o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.**

La caducidad es una institución jurídica que se estableció por el Legislador como una forma de lograr la seguridad jurídica que propende por el interés general, y es de obligatoria aplicación por el juzgador.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que la caducidad es “una sanción en los eventos en que determinados medios de control no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional”³, e impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo. En sentencia del 2 de mayo de 2016 sostuvo⁴:

*“(…) Como regla general, el término de caducidad para una acción como la que se estudia en esta providencia debe iniciar su contabilización **a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho que genera el daño** cuyo resarcimiento se pretende. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Sección ha sido reiterativa en su jurisprudencia, en el sentido de que esta regla no resulta aplicable a todos los casos, dado que algunas circunstancias específicas en la producción del daño hacen que su manifestación a quien lo sufre no sea concurrente con el aludido hecho que lo generó. Esta Sección, sobre el particular, en reciente providencia manifestó⁵:*

*La jurisprudencia de esta Sección ha señalado que pueden darse eventos en los cuales la manifestación o conocimiento del daño no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando –en consecuencia– ajeno a un principio de justicia que, por esa circunstancia que no depende ciertamente del afectado por el hecho dañoso, no pueda éste obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en aplicación del principio pro danmatus y en consideración a que el fundamento de la acción de reparación es el daño, se ha aceptado que en tales casos el término para contar la caducidad de la acción indemnizatoria **empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste el daño**.*

En la misma decisión, sostuvo que existen casos en que el daño se agrava tiempo después de la ocurrencia del hecho⁶:

³ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A - Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA - Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) - Radicación número: 20001-23-39-003-2015-00565-00(59291)..

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B. Magistrado Ponente DANILO ROJAS BETANCOURTH. Providencia del 2 de mayo de 2016. Radicación No. 190012331000200501594 01.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 21200, C.P. Hernán Andrade Rincón.

⁶ *Ibidem*. Ver en este mismo sentido sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 17542 M.P. Mauricio Fajardo Gómez; 3 de marzo de 2010, exp. 37691 y sentencia del 10 de diciembre de 2010, exp. 2010-0125, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

*En el marco de ese mismo universo, ha reconocido la jurisprudencia que ocurren eventos en los cuales los daños pueden provenir de un acontecimiento de agotamiento instantáneo, pero que también puedan –ocasionalmente- **provenir de un hecho que se va produciendo de manera paulatina o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también, en el ámbito de la contabilización del término de caducidad de la acción.***

*En eventos en que el daño se agrave con el tiempo, o que fenómenos sucesivos y homogéneos puedan producir daño continuos, se ha señalado por la jurisprudencia, que **ha de tenerse cuidado de no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo daño** (sentencia de 2 de junio de 2005, exp: AG-25000-23-26-000-2000-00008-02) pues en este último evento el término para ejercitar la acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio origen, y no así cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos hechos u omisiones, o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término para reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada uno de los daños derivados de esos sucesivos eventos.*

En lo que tiene que ver con los daños derivados del quebranto en la corporalidad de las personas, la jurisprudencia de la Sala también ha mantenido la línea de que el plazo para la presentación de la correspondiente demanda debe iniciar en el momento en el que es evidente la causación de dicho menoscabo, como se aprecia en el siguiente aparte⁷:

(...)

En síntesis, es claro que, según la demanda, la causa del daño neurológico sufrido por el menor, se produjo como consecuencia de la atención médica que se le brindó en el Hospital de Tumaco con ocasión de su ingreso a ese centro asistencial, el 30 de agosto de 1992, y que ese daño se hizo evidente trece días después de esa fecha, cuando el menor salió del estado de coma.

Por último, no puede pasarse por alto que la Sección ha indicado de igual forma, que también en los casos en los que se estudie la responsabilidad por este tipo de daños, el plazo para accionar no se ve modificado por exámenes médicos que se realicen de manera posterior, sino que, por el contrario, siempre será el momento en el que se haga evidente el daño el que determine el inicio del plazo procesal⁸:

(...)

Sin embargo, debe recordarse que esta Subsección ha afirmado que para contar la caducidad de la acción cuando se demandan los daños derivados de una afectación corporal, no basta con tener en cuenta la fecha en la que se produjo la misma, sino que es preciso determinar el momento en el cual la víctima tuvo conocimiento completo e informado de su naturaleza, su irreversibilidad y de las repercusiones que podría generarle en su vida cotidiana.⁹”
(Negrillas y subrayas fuera del texto)

En el caso de autos se tiene:

- Que el 30 de junio de 2017 le fue notificado al lesionado el dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional, expedido por el Ministerio de Trabajo donde se le determina un porcentaje del 60.46% (fls. 25 a 28)
- Que según historia clínica ocupacional de trabajo en alturas realizada por Pro Care el 8 de agosto de 2013, el señor Garcés se encontraba en óptimas condiciones de salud (fls. 29 a 33)

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 7 de octubre del 2013, expediente 18373, CP. Ruth Stella Correa Palacio.

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril del 2012, expediente 20134, CP. Mauricio Fajardo Gómez.

⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 2001-00158 (27152), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

- Que cumplidos los requisitos respectivos fue aceptado en el curso avanzado de altura del SENA, el día 23 de octubre de 2013 (fl. 34 y 35)
- Que según informe de accidente de trabajo del empleador o contratante ARL – SURA y las historias clínicas aportadas, el señor Garcés sufrió accidente de trabajo el día 08 de noviembre de 2013 donde se cayó de una torre cuando le faltaban 2 metros para llegar al suelo, ocasionándole unas fracturas de vertebrae T-12, L-1, L-2, además de fractura de ambos hombros (fl. 36 y ss)
- Que desde la fecha del accidente el demandante ha permanecido incapacitado por la empresa donde laboraba, además de que ha asistido constantemente en diversas oportunidades a consultar debido a las patologías que padece como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente laboral.
- En fecha 7 de marzo de 2019, se radicó ante la Procuraduría solicitud de conciliación extrajudicial¹⁰.
- En fecha 4 de junio de 2019, se llevó a cabo audiencia de conciliación la cual se declaró fallida¹¹.

De la secuencia anterior, se puede establecer que, aunque efectivamente la caída del señor Oscar Evelio Soto Garcés, ocurrió el 8 de noviembre de 2013, sólo a partir de la valoración por parte del Junta Regional de Calificación de Invalidez, que se produjo el 30 de junio de 2017, tuvo conocimiento cierto del daño cuya indemnización reclama.

Dadas las circunstancias anotadas, es a partir del día siguiente a la emisión de la aludida valoración que se empieza a contar el término de caducidad del medio de control y no desde la fecha de ocurrencia de los hechos, tal como lo sostuvo la providencia recurrida, motivo por el cual, a la fecha de presentación de la demanda el 11 de julio de 2019¹², aún no había precluido el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA.

El término de caducidad se suspendió a partir del 7 de marzo de 2019 con la radicación de solicitud de conciliación prejudicial y hasta el 4 de junio de 2019, fecha en la cual se declaró fallida la conciliación y se expidió la constancia respectiva.

En tal razón, en el presente asunto los 2 años para interponer el medio de control de reparación directa, empiezan a correr a partir del 30 de junio 2017 hasta el 27 de septiembre de 2019, y como quiera que la demanda fue radicada el 11 de julio de 2019¹³, la misma fue presentada dentro del término legal establecido.

Por lo expuesto, se revocará la decisión recurrida para en su lugar ordenar al *A-quo* que provea sobre su admisión, previa verificación de los demás requisitos exigidos por la ley procesal.

DECISIÓN

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión,

¹⁰ Ver folio 79

¹¹ Ver folios 79

¹² Ver folio 80

¹³ Ver folio 80

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR el auto interlocutorio 984 de fecha 03 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Guadalajara de Buga, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad del medio de control, presentada por el señor Oscar Evelio Soto Garcés y otros contra el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y en su lugar se **ORDENA** que se provea sobre la admisión de la misma, previa verificación de los demás requisitos exigidos por la ley procesal.

SEGUNDO. – Sin costas en esta instancia.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente híbrido al juzgado de origen, previo registro en siglo XXI.

La decisión adoptada en la presente providencia fue discutida y aprobadas en sala virtual de la fecha, según consta en acta de que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad públicas que se presenta en el país a raíz del COVID- 19.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada


VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado

Elab.
Vo.Bo.

Yurani López
Secretario


ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada